

INFLUENCIA PREOCUPANTE DE EE. UU. EN AMÉRICA LATINA*



POR NICOLE MARON (*)



<https://www.infostelle-peru.de/politik-und-demokratie/besorgniserregende-einflussnahme-der-usa-auf-lateinamerika/>

Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, Donald Trump ha violado la soberanía de Venezuela y, con ello, el derecho internacional. Esto resulta preocupante también porque el presidente estadounidense amenaza igualmente a otros países de la región y aparentemente quiere intensificar aún más su influencia en América Latina.

A más tardar tras el ataque militar en Venezuela y las amenazas abiertas de Donald Trump contra el presidente colombiano (“Debería entrar en razón, de lo contrario será el siguiente”), surge la pregunta de qué papel pretenden asumir los Estados Unidos en América Latina y cómo reaccionarán los gobiernos y la población de los países afectados.

El presidente colombiano

Gustavo Petro rechazó tajantemente las declaraciones de Trump y subrayó que, en caso de una intervención estadounidense, “en última

(*) Artículo publicado por Nicole Maron en <https://www.infostelle-peru.de/politik-und-demokratie/besorgniserregende-einflussnahme-der-usa-auf-lateinamerika/> (Traducción alemán-español de Yuyay).

Nicole Maron. Periodista y educadora de adultos. La experta y periodista comundo Nicole Maron promovió los derechos de las mujeres y poblaciones indígenas en Perú. Trabajó con el instituto IDECA hasta abril de 2021, ayudándolo a dar más atención pública a sus preocupaciones.

instancia incluso recurriría a las armas”. Sin embargo, por el momento hace un llamado firme al diálogo y la diplomacia, y una reciente reunión entre ambos mandatarios resultó sorprendentemente conciliadora. Petro habría pedido a Trump ayuda para detener a capos de la droga que viven en el extranjero. Esto, después de haber criticado en el pasado la estrategia estadounidense contra el narcotráfico: considera que los ataques a embarcaciones y las medidas militares agresivas en el Caribe no son una forma eficaz de combatirlo.

Sin embargo, esa fue precisamente la justificación de Trump para el ataque a Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro, así como para el notable refuerzo de la presencia militar en el mar Caribe meridional en los meses previos, que condujo a ataques contra varios barcos con víctimas mortales.

En Venezuela, la detención de Maduro fue celebrada por muchos, pero también generó críticas, ya que contradecía el derecho internacional y otros acuerdos internacionales, y porque Trump actuó sin mandato de la ONU ni del Congreso estadounidense. Poco después, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución destinada a impedir que el presidente lleve a cabo nuevas acciones militares contra Venezuela sin el consentimiento del Congreso. En noviembre, una resolución similar había fracasado por poco.

Los venezolanos, tanto dentro como fuera del país,

reaccionaron con sentimientos encontrados ante la detención de Maduro. Una gran mayoría celebró la caída del dictador y la esperanza de llevar finalmente una vida más libre tras décadas, pero el poder que Estados Unidos pretende asumir en el país genera gran inquietud, junto con la incertidumbre sobre cómo será el necesario proceso de transición. Mientras tanto, Trump anunció que por el momento quiere dirigir o gobernar el país.

“Interés propio agresivo” bajo el lema “America first”

Independientemente de los acontecimientos en Venezuela, Estados Unidos lleva décadas desempeñando un papel central —y controvertido— en América Latina. Además de la cooperación de larga data en la lucha contra el narcotráfico, la migración y la seguridad fronteriza figuran entre las prioridades de Estados Unidos. Estas políticas son criticadas por muchos como una influencia hegemónica o, de forma más tajante, como un “interés propio agresivo”, en línea con el lema de Trump “America first”. La lucha contra el narcotráfico y la llamada migración ilegal, que supuestamente amenazan la seguridad nacional, se consideran más bien un pretexto.

También resulta preocupante en este contexto la amplia presencia militar de Estados Unidos en diversos países latinoamericanos, que abarca desde programas de formación y venta de armas hasta la instalación de bases militares. En total, desde 2018 Estados Unidos dispone de 76 bases

oficiales en la región, además de numerosas “bases operativas no confirmadas”.

En Perú, según datos oficiales —y pese a informaciones contrarias en distintos medios— no existen bases permanentes estadounidenses, pero la influencia militar y de otro tipo no debe subestimarse. En mayo de 2023, el Congreso peruano autorizó la presencia de militares estadounidenses armados con fines de entrenamiento. La decisión se tomó pocos meses después de la represión violenta de protestas a nivel nacional por parte del gobierno de Boluarte. Esto fue criticado porque, en aquella situación delicada, difícilmente podía hablarse de una cooperación neutral, sino más bien de un respaldo político a un gobierno controvertido.

En diciembre de 2024 se renovó la autorización para el despliegue de personal del Departamento de Defensa de EE. UU. y sus armas durante 2025, con el fin de llevar a cabo “medidas de cooperación y formación con las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú”. Los militares estadounidenses debían estar presentes, entre otros lugares, en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Santa Lucía, Puerto Maldonado, Iquitos y Pucusana, no solo para entrenar a la policía nacional, sino también para suministrar armas ligeras. El periódico peruano La Razón informa de reacciones mixtas en la política y la sociedad, mientras que el gobierno considera esta

cooperación clave para “fortalecer la seguridad del país y hacer frente a posibles amenazas”.

En 2023 y 2024 se llevaron a cabo en Perú los ejercicios militares multinacionales “Resolute Sentinel” de la Fuerza Aérea de EE. UU., cuyo objetivo es mejorar la cooperación entre las fuerzas estadounidenses y los países socios de la región. Entre los objetivos de estos ejercicios se incluyen la formación en ayuda en caso de desastres, preparación médica, ciberdefensa y tácticas de combate con armas ligeras.

En enero de 2026, Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo de 1.500 millones de dólares para ampliar una base naval en Callao, situada cerca del megapuerto de Chancay, operado por China y abierto en 2024. El Departamento de Estado explicó que Perú había solicitado la compra de equipamiento y servicios para modernizar su principal base naval. La venta “mejorará la seguridad de un socio importante que es motor de estabilidad política, paz y progreso económico en Sudamérica”.

Más allá de la cooperación directa de las fuerzas de seguridad, el ejército estadounidense también interviene en América Latina de forma más indirecta, por ejemplo, en la lucha contra desastres ambientales o crisis humanitarias. En estos casos, se sospecha que no se trata tanto del medio ambiente como del temor a que este tipo de crisis y la incapacidad para gestionarlas puedan desestabilizar el orden político.

Desestabilización política de la región

En general, la influencia de Estados Unidos en Perú y otros países latinoamericanos no debe subestimarse, aunque siempre surge la cuestión de sus motivaciones. Ataques como el de Venezuela se justifican con la guerra contra las drogas, que supuestamente también busca proteger a la población estadounidense, donde aumentan las muertes por consumo de drogas. Sin embargo, más allá de la cuestión de cuál es el origen real del problema y si puede combatirse mediante influencia militar en América Latina, la sustancia fentanilo —principal responsable de las sobredosis mortales— no se produce, según diversos informes, en los países afectados. El Informe Internacional sobre Estrategias de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de marzo de 2025 señala: “El noroeste de México ha sido identificado como la única fuente significativa de fentanilo ilegal con impacto en Estados Unidos —a 3.000 millas de Venezuela”. The New York Times concluyó en septiembre de 2025 que “no hay pruebas de que el fentanilo se produzca o comercialice en Venezuela o en otras partes de Sudamérica”.

El Comando Sur de EE. UU., responsable de América Latina y el Caribe, también determinó en 2022 que el 80 % de las drogas destinadas a Estados Unidos entra por el Pacífico oriental y como máximo el 20 % por el Caribe. Por tanto, la sospecha de que la guerra contra las drogas es una excusa para intereses geopolíticos no

resulta descabellada, como tampoco el temor de que la intervención estadounidense no genere estabilidad, sino lo contrario. “La negación del derecho internacional, la normalización de la amenaza y el uso de la fuerza militar, así como el empleo de sanciones económicas e intervenciones políticas para imponer objetivos geopolíticos, ponen en peligro los procesos democráticos, agravan los conflictos sociales y pueden socavar la estabilidad política de regiones enteras”, escribe el Foro Latinoamericano de Berlín, que advierte además del riesgo de una influencia directa de Estados Unidos en las elecciones de 2026 en Colombia, Perú y Brasil. “La historia muestra que tales intervenciones externas tienen consecuencias catastróficas para el desarrollo sociopolítico de los países afectados”.

Por último, la creciente intervención de Estados Unidos en América Latina también tiene una dimensión geopolítica. China y Rusia, las dos grandes potencias enfrentadas con Trump, han condenado duramente la intervención en Venezuela, en parte por sus intereses económicos: ambos países han invertido significativamente en la producción petrolera venezolana y son importantes compradores del recurso. Además, existe cooperación militar y apoyo político y diplomático, especialmente frente a Estados Unidos. Esto otorga a Venezuela una importancia considerable en el conflicto entre potencias, sobre todo teniendo en cuenta que el país posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo.